

Lección Inaugural en la Universitat de Girona

Girona, 7 de octubre de 1997

Peter F. Drucker ha definido a la sociedad poscapitalista, creo que muy acertadamente, como la "sociedad del saber". Plantea de forma muy atrayente que así como en el XIX y la mayor parte del XX los medios de producción considerados básicos por los economistas eran el capital, los recursos naturales y la mano de obra, en los albores del próximo milenio el medio de producción por excelencia: "es y será el saber". La siguiente cita pienso que resume muy bien su mensaje:

Las hipótesis o percepciones de Drucker sobre una nueva concepción del valor generado mediante la productividad y la innovación reciben un fuerte respaldo empírico en el conocido trabajo de M. Porter aparecido en esta misma década, subrayando como ventaja competitiva clave en los sistemas económicos de los países desarrollados "la capacidad para innovar". Innovar en sentido amplio: nuevos productos, redes de comercialización, procesos productivos, formación, marketing..... . Su investigación referida a diversidad de países y sectores sitúa a la innovación como sinónimo de competitividad en la empresa actual.

La interrelación entre la capacidad de innovar porteriana y la sociedad del saber parece obvia. Llevada a la práctica de la gestión de una empresa es claramente expresado por Drucker cuando afirma:

"...durante la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después de la misma un gerente era definido como alguien que es responsable del trabajo de unos subordinados..... a principios de los cincuenta la definición ya había cambiado a un gerente es responsable del rendimiento de la gente. Ahora sabemos que ésta también es una definición demasiado estrecha. La definición justa es un gerente es responsable de la aplicación y rendimiento del saber" .

El lema "la sabiduría (como sinónimo de conocimiento) es poder" ya lo apuntó Bacon en la prehistoria de la sociología. Quizás debemos cansarnos repitiéndolo. Resulta bastante obvio que el papel a desempeñar por las universidades en la sociedad del saber, la formación de actitudes idóneas, el desarrollo de un acervo de conocimiento apropiados para el momento y el lugar, han sido, son y serán decisivos. Una mirada a aquellos sectores que están desempeñando un papel clave en el progreso económico (biotecnología, telecomunicaciones, informática, biomedicina...) basta para cerciorarse y confirmarlo.

Sin embargo, deberemos escribir, vociferar y exigir más, y por supuesto más convincentemente, si nuestros responsables políticos no se percatan de la necesidad de aplicar mayor cantidad de recursos a nuestras universidades. Recursos, en definitiva, para el progreso. Muy recientemente, Bill Clinton, el responsable del país más poderoso de la tierra, en su discurso sobre el "Estado de la Unión" anunciaba que el objetivo prioritario de su mandato sería la educación. Hay buenas razones para ello. Me referiré, pues, a las vertientes de la actividad universitaria que están muy directamente vinculadas al progreso económico y social y que justifican la rentabilidad de los recursos públicos que absorbemos y reclamamos.

Los recursos son escasos

Hemos llegado a un punto en el que quizás convenga aclarar algunos principios. Como sabe ya casi todo el mundo, aparte de los economistas, los recursos son escasos y susceptibles de usos alternativos. Si reivindicamos más para nuestras universidades quizás ello implique menos para Sanidad, las Pensiones, la Defensa o los sueldos de los funcionarios o, en su defecto, mayores aportaciones de los contribuyentes. Tenemos, pues, la obligación moral de justificar una elevada rentabilidad económica y social de los recursos que disputamos o a los que aspiramos para la Educación.

Las universidades deberían tener un fácil acceso a recursos en nuestros días. Si los Gobiernos fijan como objetivos prioritarios la competitividad empresarial y la creación de empleo, la más sólida vía para su consecución esta basada en la capacidad para innovar, en la capacidad para utilizar adecuada y productivamente el conocimiento. Sin embargo, en círculos gubernamentales y sociales se suscita a veces preguntas sobre si las universidades presentan unas estructuras lo suficientemente eficientes para hacer socialmente rentable la asignación de fondos financieros.

Es justo reconocer que nuestras universidades adolecen de determinadas rigideces y deficiencias que impiden con frecuencia dar respuestas ágiles y eficaces a las cambiantes demandas del

mercado e, incluso de nuestra sociedad. También es cierto que muchas veces se pone énfasis de forma injusta en puntuales deficiencias (rigidez de titulaciones, planes de estudios...), en detrimento de sus enormes y contrastadas potencialidades (internacionalización, expansión de los contratos de investigación, versatilidad y crecimiento de títulos propios...).

Añadamos que los poderes públicos recelan de la autonomía universitaria . Se resisten a dar "cheques en blanco", fondos sin contrapartidas. A este aspecto se une el delicado hecho de que difícilmente se puede preservar una autonomía universitaria sujeta a dependencias y servilismos políticos derivados de una falta de autonomía financiera. El intrincado equilibrio entre la anterior consideración y esta última hace necesario el establecimiento de unas bases que por un lado garanticen la legítima necesidad de justificar una buena administración y asignación de los impuestos de los ciudadanos; por otro, se garantice una independencia y credibilidad más sólida y estable, más allá de la alternancia política, supeditada únicamente al interés del progreso científico y ajena a su manipulación y mansedumbre.

Las soluciones no parecen tan difíciles. Las administraciones deben creerse la potencialidad de nuestras universidades. Las universidades debemos renunciar a la obtención de fondos sin contrapartidas. Ya abundan algunos ejemplos muy interesantes de financiación objetiva -basada en un concepto previamente definido de alumnos financiados -. Paralelamente haría falta una "Ley de Mínimos" -de dotación de recursos mínimos- que permitan a las universidades preservar su autonomía cuando esta se vea seriamente amenazada.

Más allá de la financiación objetiva y del acceso a los mencionados recursos mínimos, decíamos que es lógico que las administraciones impongan cotas de racionalidad, logro de resultados específicos, prioridades objetivas en la utilización de los fondos públicos, supeditadas a la consecución de un mayor volumen de estos. Bienvenidas sean. Esto no es tan complejo como puede parecer a primera vista: modelos con variables cuantificables, contratos programa, etc., mecanismos a través de los cuales las universidades captarían fondos adicionales una vez demostrada la consecución de determinados objetivos relevantes dentro de la política económica y social de los gobiernos, al tiempo que evitaría la discriminación en función de un peligroso servilismo.

Desde la perspectiva expuesta es muy urgente que se acometan temas como la calidad de una enseñanza universitaria más activa; se desarrolle con prudencia y rigor un tercer ciclo; se establezcan bases y objetivos para nuevas titulaciones y planes de estudios acordes con las demandas actuales y futuras; se afronte la competitividad de nuestros equipos investigadores; la formación continua; la movilidad e internacionalización; las siempre costosas necesidades para una investigación experimental competitiva..... Se consolide, en definitiva, la moderna noción de universidad como "multiversidad" en clara alusión a la conocida idea de Clark Kerr .

Un marco financiero autoexigente no debe perder de vista el coste de oportunidad de una política gubernamental insensible a las posibilidades que se derivan del espectacular desarrollo de la ciencia, donde en poco más de un quinquenio se duplican los nuevos conocimientos. Esto lleva a una doble exigencia:

las empresas, para poder seguir siendo competitivas, deberán demandar constantemente transferencia de tecnología e innovación y un aprendizaje continuo que exigirá una imprescindible alternancia entre estudio y trabajo en edades ya adultas.

El coste de oportunidad de no apostar por la educación es a medio plazo un retraso relativo en los niveles de desarrollo y bienestar. Dicho en otras palabras, en el peor de los casos la apuesta por la educación universitaria y el desarrollo de la investigación, será una apuesta muy sólida en comparación con otras alternativas, incluso, cuando no se den las condiciones anteriormente expuestas. Los gobiernos responsables están condenados a apostar en educación. La opción de Bill Clinton más que una indicación es una advertencia para los demás países.

Debates como el de los Órganos de Gobierno, los Consejos Sociales -sin duda mejorables- nos apartan de las auténticas prioridades de las universidades españolas. Toda la diversidad de modelos existentes internacionalmente: el francés, el italiano, el alemán, el anglosajón presentan pros y contras... . La solución no vendrá de la mano de una "inspirada" regulación que "libere de las pesadas cargas y servidumbres a los rectores democráticamente elegidos por insaciables masas de alumnos, PAS o profesores sindicados", para quedar vinculado a una minoritaria "elite de la excelencia". Una segmentación entre una aristocracia universitaria y un proletariado también

universitario, no parece muy recomendable tras el signo de los tiempos y la enseñanza más elemental de la historia.

El auténtico debate son los recursos, las prioridades, los retos: el modelo de universidad que otros países están alcanzando. La utopía en este país todavía es posible, aunque se vea amenazada por situaciones coyunturales que, sorprendentemente, todavía pueden tener lugar en nuestro país.

Los reinos de la utopía

Hace nueve años tuve la suerte, a través de la Fundación Eisenhower Exchange Fellowship, de conocer las que están consideradas como las dieciséis mejores universidades norteamericanas. Como universitario fue una experiencia inolvidable y, en cierto sentido, frustrante. Como economista hay todavía algunas cosas que, aunque comprensibles, me resisto a aceptar. El PIB por habitante en EE.UU. alcanzaba en 1995 la cifra de 26.413 \$, en España esta ratio se sitúa en 14.312 \$, casi la mitad. Sin embargo, los recursos que por alumno disponen algunas universidades americanas multiplican por quince los que generalmente recoge el presupuesto de una universidad española.

Si se espera que las universidades españolas desempeñen un papel muy activo en la reducción de los desfases tecnológicos y formativos, parece no muy descabellado atenuar las distancias en las dotaciones de recursos y grado de desarrollo con sus homónimas norteamericanas. Todo parecería indicar que un país de nuestro nivel de desarrollo, anclado hasta hace poco, con persistencia, en una tasa de paro en torno al 20 por 100 -durante quince años- y con graves problemas para la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, necesita de lo que puedan dar de sí sus universidades, especialmente en la reducción de tales problemas.

¿Es un objetivo prioritario de la política española, atenuar las distancias en las dotaciones de recursos y grado de desarrollo de nuestras universidades en relación con las de los países con los que debemos reducir distancias, competir? ¿Hay conciencia social del papel que potencialmente podemos y debemos desempeñar? ¿Son nuestros aliados incondicionales los medios de comunicación en el apoyo a nuestras funciones y necesidades?. Estas preguntas están lejos una respuesta totalmente satisfactoria en nuestro país.

Permítame que, inmerso de lleno en la cuestión, recurra a la utopía. En 1996 la Universidad de Stanford liquidó un presupuesto de 182.000 millones de pesetas -273.000 millones si se incluye su hospital clínico-. Además posee un capital acumulado de 468.000 millones de pesetas, lo que le proporciona algunos años una rentabilidad en torno a los 20.000 millones de pesetas. Todos estos recursos financieros para: 13.811 alumnos, 5.132 "PAS" (Personal de Administración y Servicios) y más de 2.000 profesores .

Aunque las comparaciones son odiosas uno no puede evitar que le vengan a la mente. Sin ninguna pretensión, por supuesto. En 1996, la Universidad de Alicante ha liquidado, aproximadamente, un presupuesto de 15.000 millones de pesetas -menos de lo que renta el capital de Stanford-. Cuenta, sin embargo, con 30.000 alumnos, unos 600 efectivos de Personal de Administración y Servicios y no más de 1.200 profesores. Puede parecer utópico mirarse en tales altas instancias . Incluso reclamar lo que por derecho, probablemente, debe corresponder a una de las mejores universidades del mundo que, tanto o más que a las subvenciones públicas, debe a personas como Jane y Leland Stanford o más recientemente a Bill Hewlett y David Packard -de los que somos clientes la mayor parte de las universidades españolas-. Tantas veces se ha dicho que no importa una vez más: debería incentivarse en mayor medida el tratamiento fiscal de las donaciones privadas a nuestras universidades. No obstante, que no haya frustraciones: estamos lejos del tamaño empresarial y de la cultura social de otros países. Esto únase, muchas veces, a la falta de capacidad e imaginación para reconocer generosa y ostentadamente el mecenazgo por parte de las propias universidades: y es que el apoyo al impulso de estas debe venir, irremediabilmente, desde el sector público aunque, eso sí, no exclusivamente.

Frecuentemente se oye en foros políticos y académicos objetivos tales como: incrementar la calidad docente, necesidad de hacer más efectiva la investigación básica, acercar la aplicada a las demandas de nuestros tejidos productivos necesitados de capacidad para innovar, revisar la oferta de los nuevos planes de estudio, desarrollar y prestigiar la calidad de un tercer ciclo -a propósito, sólo el 33 por 100 del total de alumnos de Stanford son undergraduates- mejorar la movilidad, entre otras cuestiones. Se olvida una parte fundamental del discurso. No podemos alcanzar el nivel de las universidades de otros países si no nos ponemos al día en recursos. Lo demás es demagogia o tensar un sistema que difícilmente puede dar más de sí. En síntesis, debemos hablar seriamente de financiación.

En la mayoría de las universidades españolas, hemos vivido unos años bajo el síndrome de que mirar a la utopía era necesario y probablemente posible. No debiéramos renunciar a objetivos de convergencia universitaria, aunque la distancia de partida sea tan inmensa y, aparentemente, inalcanzable. Lo que más duele es que el escepticismo venga de los propios entornos políticos, empresariales o sociales o, incluso, lamentablemente de nuestras universidades.

No hay que esforzarse mucho para mostrar en cada autonomía o universidad española con los problemas con los que nos hemos tropezado a la hora de conformar una oferta universitaria que, simplemente, respondieran a una demanda que por espacio de un decenio ha crecido espectacularmente hasta alcanzar un millón y medio de alumnos en su conjunto. Problemas de terrenos, inversiones o un crecimiento presupuestario que no se ajustaba al ritmo de crecimiento de la demanda, no han impedido que se trabaje en el norte o en el sur con ilusión e imaginación. Algo que políticamente no se concibe como un logro muy significativo de nuestro país y que debiera suscitar, en justicia, el máximo orgullo y reconocimiento social en nuestro país.

Llegados aquí la mayor parte de los rectores de las universidades españolas quizás nos conformamos con que se afronten y se solucionen los problemas básicos, el pan nuestro de cada día. No podemos permitirnos el lujo de pensar en la utopía, en el modelo de universidad que potencialmente podríamos alcanzar. Probablemente, esto no debería ser así. Debemos defender lo utópico, abrir la creencia entre nuestros propios colectivos de que merece la pena luchar por abrir vías rápidas de avance y progreso. Mirar a la utopía quizás nos releve de debates estériles y nos lleve la mirada a las auténticas prioridades y retos de la universidad española, de su potencialmente relevante papel económico y social.

Permitanme señalar a la utopía universitaria española como la esperanza de lo que ya está en alguna parte, deseo realizable pero no realizado, anhelo que espera el esfuerzo y la comprensión social y política para materializarse en nuestra particular Isla de Tomás Moro o la Nueva Atlantis de Francis Bacon que divisamos ya en otros países. Una esperanza para el progreso y el bienestar de nuestras estructuras sociales -insaciables del principio de igualdad de oportunidades-, a través del encuentro de las ideas y del trabajo científico en la hora creativa, en el perenne reto de fulminar nuestros límites .

La construcción europea

Es importante introducir en nuestros discursos la construcción europea. Envidio sin reservas esa ingente cantidad de recursos y eficacia que derrochan las universidades norteamericanas, pero me fascina y siento la lógica admiración y reverencia por la diversidad y entidad de la cultura europea.

La unidad económica y monetaria ha logrado una vieja utopía. Tras duras guerras y convulsiones prolongadas durante siglos, el factor económico ha determinado un proyecto imprevisible por vías militares o políticas. Sin embargo, una asociación de intereses económicos es una frágil unidad. Las universidades deberían desempeñar un relevante papel en el encuentro entre culturas muy diferentes, en la aceptación de tan vasta diversidad.

El encuentro todavía pendiente de dos culturas europeas como la germana y la latina, al filo de que el Bundesbank nos fije a todos los europeos los tipos de interés, queda sobrepasado por la apertura hacia los países y centro del este de Europa. ¿Es factible una unidad de intereses económicos donde prevalecen barreras culturales?. Por una parte, los retos económicos que protagonizan el momento actual pueden hacer olvidar la importancia de que prevalezcan objetivos culturales o educacionales para hacer más sólido el proyecto de la Unión. Por otra, el concepto territorial de Europa se amplía geográficamente hacia una Europa de Este, aislada durante decenios y demandante de urgente atención por Occidente, pero cuya participación hace extremadamente más complejo el proyecto común. Sin duda, se ha infravalorado el papel que potencialmente puede desempeñar la educación en la comprensión cultural, social y en la aceptación de la diversidad como base para una Unión en vertientes económicas o políticas. Se ha infravalorado en su esencial función para desarrollar un lenguaje que ya es común: el científico, sin olvidar las economías de escala que para el progreso y la cooperación cultural y social representa el mantenimiento de barreras artificiales en la transmisión del conocimiento.

La extensión del inglés y la revolución de las tecnologías de la información nos hace más próxima una universidad americana que una alemana o portuguesa. Sin embargo, la libre movilidad de trabajadores -uno de los pilares de la Unión- nos exige transformar un mero proyecto económico en uno cultural que vaya suprimiendo barreras de muy diferente signo y condición y que permita en la realidad la movilidad de recursos humanos y la concepción ciudadana de un espacio común

europeo. Los programas de intercambio, Erasmus, Sócrates, Leonardo... llevan consigo ambiciosos retos más allá de la simple movilidad estudiantil. Se trata de construir las bases de la convivencia, solidaridad y progreso de la identidad y diversidad europea.

Todo lo que hagan las universidades en esta dirección será poco. Somos protagonistas de un gran acontecimiento histórico -la unidad europea- del que las universidades no pueden permanecer al margen. Su papel activo debe impulsar la movilidad, la colaboración científica, el conocimiento y respeto de la diversidad cultural. Nuestros ámbitos docentes o los programas de investigación deben partir de una concepción más amplia. Hay un largo camino por recorrer.

Dejenme que siga con algunas preguntas: ¿hay una estrategia europea para potenciar en la dirección apuntada el papel de las universidades?. La contestación puede darla un sencillo contraste entre el énfasis en la política agraria y la escasez de recursos de los programas de movilidad europeos . ¿Existen ambiciosos planes nacionales o regionales de apoyo a la europeización de nuestra educación superior?. Creo que es innecesario responder.

La diversidad de la cultura europea puede llegar a ser uno de los recursos educativos más importantes de nuestras universidades. Más allá de las aspiraciones de Carlomagno, Carlos V, Napoleón o del sectarismo hitleriano, la unión europea será el patrimonio de un respeto a la diversidad, del conocimiento de un gran acervo cultural por parte de las grandes masas ciudadanas. Este debe ser el punto de arranque de una concienciación generalizada para que la construcción europea vaya más lejos de una unión económica y monetaria.

La movilidad ya hemos dicho que es un aspecto crucial en el tema que nos ocupa. Programas europeos como Sócrates, Leonardo, Tempus..., han permitido introducir en nuestros estudiantes una dimensión europea difícilmente alcanzable en el reducido marco de nuestras aulas. Sin embargo hay vías potenciales no suficientemente desarrolladas: titulaciones conjuntas, programas de cooperación científica, intercambio de profesorado..., por no hablar de la "paradoja europea" y su retraso relativo, globalmente respecto Estados Unidos y Japón en materia de transferencia tecnológica .

Nuestro país está situado en la periferia geográfica europea. Esta situación se hace más preocupante con la desaparición de las barreras políticas del Centro y Este europeos, y con la unidad alemana. No tengo espacio de tiempo para una reflexión, que desbordaría mis modestas pretensiones, pero creo lógica una posición de nuestro país y sus regiones en el establecimiento de políticas prioritarias europeas que nos compensen de las dificultades derivadas de nuestra lejanía de los grandes entornos donde se concentra mayoritariamente el grueso del poder político y económico de la Europa del futuro.

Lo más preocupante es que, programas de movilidad aparte, la cuestión europea, más allá de los tópicos, no pertenece ni tan siquiera al lenguaje diario, a nuestras inquietudes y preocupaciones más comunes. Una vez más los recursos debieran incentivar objetivos como los que mencionábamos anteriormente. De lo contrario, corremos el riesgo de pertenecer a Europa sin estar en ella.

¿A dónde hemos llegado?

Hasta aquí

En los últimos años las universidades españolas se han visto afectadas por profundos cambios. Al espectacular crecimiento de la demanda -casi un millón y medio de estudiantes en el curso 1996-97- se ha unido la fuerte expansión de una oferta en la que se da cabida a nuevas universidades, un dimensionamiento notablemente mayor de las ya existentes, el concurso de las universidades privadas, todo ello en el marco de la profusión de nuevas titulaciones, títulos propios, desarrollo de programas de posgrado...

En la misma línea, y paralelamente, la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, hace ya trece años, ha supuesto una muy notable reestructuración y modernización de nuestras universidades: departamentos, profesorado, nuevos planes de estudios, órganos de gobierno, procesos estatutarios, transferencia de investigación, interrelación con la empresa, movilidad, internacionalización... Sin entrar en una valoración de las distorsiones o beneficios que haya podido ocasionar, lo cierto es que su presencia ha condicionado la evolución buena parte de la universidad española en unos años decisivos para su consolidación.

Sin ánimo de mover a compasión a nadie, a los equipos de gobierno de nuestras universidades no les ha faltado trabajo. La de Alicante puede ser un ejemplo de aquellas universidades españolas jóvenes -nace en curso 1979/80- que se han visto afectadas por un crecimiento de la espectacular demanda, en muy pocos años, difícil de asimilar o digerir para un centro superior de tan reciente creación y, paralelamente, por su obligada adaptación a las exigencias que ha llevado consigo la Ley de Reforma Universitaria y las necesidades y expectativas de su entorno económico y social.

Las dificultades para planificar un crecimiento tan intensivo, en tan pocos años, son innumerables. Para cualquier tipo de gestor, público o privado, hubiera sido difícil de afrontar esta situación, incluso en un marco donde la sensibilidad o los recursos financieros no estuvieran ausentes. Es mucho más complicado, obviamente, si desde las administraciones públicas no se planifica suficientemente o no se efectúan las dotaciones presupuestarias necesarias porque se desconocen las previsiones de la demanda dentro del sistema. En cualquier circunstancia, una universidad de creación relativamente reciente -nacida en los últimos 20 años- se enfrenta a tareas y problemas muy complejos.

Sin ningún ánimo de dramatizar, lo cierto es que las universidades españolas han vivido durante estos últimos años situaciones muy difíciles. Las cifras disponibles su financiación ponen aun más de relieve el esfuerzo de numerosas personas que, más allá de los muy limitados medios de que disponían, han desarrollado su trabajo con eficacia, rigor y brillantez. Pese al progreso experimentado en estas últimas décadas nos hemos desenvuelto dentro de una "cultura de la escasez" y ello nos ha obligado a racionalizar todo lo que admitía algún alivio presupuestario (racionalización de plantillas docente y administrativa, privatización de servicios, mecenazgo...). Hoy en día el presupuesto por alumnos en términos reales es menor o igual que el vigente hace una década en muchas universidades. La precariedad en el empleo del profesorado es más preocupante cuantitativamente hablando que la que se registraba al inicio de la década de los ochenta.

Hoy, se puede presentar un balance realmente positivo, atribuible, en su totalidad al tesón y generosidad de dichos profesores y trabajadores que, ligados a una administración pública, han revalorizado su condición de funcionarios, en un marco institucional adverso a la hora de introducir valoraciones positivas sobre estos colectivos.

Mirando al futuro

Con todo, es más importante hablar del futuro. La obligada dinamicidad de las universidades en nuestro tiempo exige abandonar posturas contemplativas, reclamar el relevante papel que deben desempeñar en la sociedad española durante los próximos años y reivindicar con prioridad los medios que son imprescindibles para ello.

Me centraré en un único tema que, a mi modesto juicio, justifica sobradamente una importante asignación de recursos financieros a las universidades: el papel que potencialmente están llamadas a desempeñar las universidades españolas en relación al crecimiento económico, competitividad empresarial y empleo en nuestro país.

Al respecto, pocos discutirían que la universidad española haya de colaborar de forma decisiva en la consolidación de un tejido productivo en el exigente marco internacional que conlleva el proyecto de la Unión Europea y la globalización de la economía en general. Que debiera aportar soluciones a los complejos y difíciles problemas que afronta el mercado de trabajo de nuestro país y que se prolonga ya por casi dos décadas. Problemas como la desindustrialización, débil capacidad de terciarización, vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas, inviabilidad de buena parte del sector primario, se unen a la tasa de desempleo más elevada de los países de la OCDE, paro juvenil, desempleo persistente y de larga duración, etc. Un círculo vicioso de problemas estructurales difícil de romper con las recetas convencionales de la política económica ortodoxa.

Un marco no triunfalista en el que seguro tienen que ver factores tales como: la escasa demanda de I+D y una endeble capacidad innovadora... . El tema es que, de tanto hablar de esto, hemos convertido los problemas en tópicos y los hemos acabado asumiendo con una mezcla de incapacidad y conformismo. La solución de una gran parte de estas cuestiones puede pasar por un papel más activo de nuestras universidades siempre que, primero, los poderes públicos se convenzan de su potencial papel; segundo, se les dote de los medios e incentivos necesarios.

Como en todos los países, los progresos de la competitividad de la economía española están ligados a la capacidad innovadora de nuestras empresas. Parece obvio, como insistiré posteriormente, que la introducción de estas filosofías innovadoras debe venir a través de la

formación de dirigentes y técnicos receptivos y familiarizados con los nuevos lenguajes tecnológicos y científicos de nuestros días. Por no hablar ya de la decisiva participación de las universidades en el desarrollo de la investigación aplicada y la transferencia de ideas o proyectos, especialmente, en un contexto donde el tejido empresarial predominante se encuentra bastante lejos de poder asimilar los avances ligados a empresas de alta tecnología o las derivadas de los progresos científicos en los principales centros de excelencia del mundo.

La desindustrialización, las tasas de desempleo, su persistencia, la economía sumergida, la débil capacidad de terciarización..., a las que antes aludía, no son más que los síntomas de la debilidad estructural de nuestro sistema productivo: límites de su competitividad, de su capacidad para introducir innovaciones. Las limitaciones de las estructuras empresariales predominantes (pequeñas empresas familiares, sectores tradicionales...), admiten pocas soluciones alternativas a un papel más activo y decisivo de la formación y la investigación.

Sin embargo, en medios políticos quizá no se tenga tan claro que la clave del progreso de la competitividad se encuentre hoy en día asociado a nuestras universidades. Lamentablemente, predominan las opiniones de algunos representantes políticos que sostienen con frecuencia argumentos tales como "el inminente declive de la expansión demográfica" para justificar el estancamiento de las subvenciones a la educación pública. Convendría detenernos un poco a repasar estas cuestiones y a ello voy a dedicar el final de mi intervención.

Factores demográficos al margen, existen un buen conjunto de razones a favor de un mayor y más decidido apoyo financiero a nuestras universidades. Desdichadamente no abundan los estudios en el país que establezcan los correctos vínculos entre el desarrollo económico de los últimos cuarenta años y el papel desempeñado por las universidades españolas. Afortunadamente esta carencia se ve paliada en parte por la existencia de investigaciones referidas a otros países.

Vayamos a la denominada "New Growth Theory", cuya base principal descansa en el establecimiento de vínculos entre el crecimiento económico moderno y las inversiones en I+D. En países como EE.UU... , según la misma, el cincuenta por ciento del crecimiento económico de los últimos cuarenta años estaría ligado a las inversiones en investigación y desarrollo. La constatación de este hecho ha pasado ya a formar parte del lenguaje político; un reciente informe del Presidente del Council of Economic Advisors sostenía la estrategia de la política económica norteamericana en estos términos:

"Incrementar la productividad de la fuerza de trabajo en América es la clave para un más alto nivel de vida y fortalecer el crecimiento económico en el futuro. Inversiones en investigación y desarrollo son la clave para incrementar la productividad, representando la mitad o más del crecimiento del output por persona y para la creación de nuevos procesos y productos" .

Bien es cierto que el crecimiento económico americano ha estado tradicionalmente ligado desde el desarrollo de la II Guerra Mundial -piénsese en las armas atómicas, electrónica moderna, la informática...- a una larga lista de actividades científicas relacionadas con el esfuerzo de este país durante el armisticio. Posteriormente, hasta nuestros días, las universidades americanas han desempeñado un papel clave en un país donde la iniciativa privada (empresas como AT&T, IBM, Du Pont...) han destacado por la espectacularidad de sus logros, incluso en investigación básica. Sectores productivos donde la innovación juega un papel decisivo y un gran tamaño de empresa son dos factores no equiparables para la economía española.

De aquí cabe deducir lo contrario de lo que algunos se empeñan en demostrar más a menudo de lo que sería aconsejable. Dadas las debilidades de una buena parte del sistema productivo español y su crónica incapacidad, en términos comparativos, para llevar a cabo con cierta solvencia niveles aceptables de investigación aplicada y desarrollo, quizás cabría ponderar de forma diferente la distribución tradicional de funciones. Distribución que, en el caso americano por ejemplo, se centra en un reparto de la investigación básica a las universidades (aunque no exclusivamente) y de la aplicada a las empresas (las cuales también participan relevantemente en la básica, al menos algunas de ellas).

Los niveles de desarrollo de la investigación básica en algunos países hacen difícil la "competitividad" de gran parte de nuestros grupos investigadores en el contexto de los países más avanzados. Sin renunciar a una relación que nos permita con fluidez la utilización de un lenguaje básico común, parecería más interesante que en las universidades españolas una buena parte de sus aportaciones fuera dirigida a las vertientes de la investigación aplicada y desarrollo, paliando de esta forma cierta incapacidad del sistema productivo para aprovechar los potenciales avances científicos en campos afines o próximos. Esto no significa ni mucho menos renunciar a la investigación básica, si no establecer un equilibrio más cercano a las necesidades del país. Aceptar este hecho podría ayudarnos a centrarnos más eficientemente en las demandas de nuestro sistema productivo.

Se rompería de alguna forma el esquema americano, según el cual se sostiene que cuando las universidades crean investigación básica están generando nuevas ideas que la industria puede aprovechar e invertir en investigación aplicada y desarrollo. Trasladar ideas desde la investigación básica a las empresas españolas para que estas asuman líneas de investigación aplicada puede parecer, salvo excepciones, bastante utópico, especialmente en algunas áreas de la geografía española. Sin embargo, no resulta tan descabellado la transferencia de tecnología o la capacidad de innovación subyacente en determinadas líneas de la investigación aplicada que se puede llevar a cabo en la mayor parte de nuestras universidades con relativa facilidad.

La eterna clave sigue siendo cómo enfocar las relaciones entre las universidades y el sector privado de tal forma que dicha relación sea fructífera. Algunas veces llueven severas críticas a las universidades reprochándoles su fracaso o su poca entidad. Se olvida -aparte de presentar resultados exitosos derivados del artículo 11 de la LRU- que esta relación ha sido considerada muy poco satisfactoria en casi todos los países, incluida la experiencia americana, a pesar de "puentes" tan espectaculares entre las universidades y la industria como "Silicon Valley" o "Route 128". Las cosas están cambiando para bien: telecomunicaciones, electrónica, servicios informáticos, multimedia, agricultura-biotecnología... En revistas empresariales americanas es frecuente leer las expectativas que producen en las empresas los potenciales avances en Biotecnología de las universidades del área de California.

Quizás uno de los programas regionales más interesantes en Estados Unidos sea el implantado por el estado de California denominado: "The Industry-University Cooperative Research Program", con resultados muy satisfactorios en el campo de la biotecnología. El programa funciona de la siguiente forma: un científico o ingeniero de un campus universitario se une a un científico de una empresa (tanto una muy pequeña o, incluso, una multinacional) y hacen una propuesta para investigar que ambos, conjuntamente, consideran de interés. Dichas propuestas tienden a ser no de investigación básica, sino que se canaliza generalmente hacia los campos más fuertes o prometedores que existen en la universidad, esto es, la que estaría en una fase que con cierto trabajo adicional, sería capaz de generar un nuevo producto o proceso y crear nuevos puestos de trabajo .

Este tipo de iniciativas está teniendo mucha más aceptación en otros países al margen de los EE.UU... donde las empresas no desempeñan un papel tan activo en la investigación aplicada. En Canadá resulta muy interesante el impulso de alianzas entre universidades, empresas y gobiernos para la creación de centros como las University Research Centres (URC), o los Science and Technology Centres (STC), o los Organizational Research Units (ORU) destinados a promover el desarrollo tecnológico . En algunos casos, como el de la región de Ontario, el gobierno local impulsó en 1987 un programa de 204 millones de \$ iniciativa que se vería posteriormente apoyada con la adición de fondos estatales.

La profusión de Parques Científicos y Tecnológicos por todo el mundo presenta resultados muy dispares. Sin embargo se tiende a resaltar más los fracasos que los avances, cuando sería de esperar que el éxito fuera asociado a caminos nada fáciles en la mayor parte de los casos y los resultados se evaluaran en un horizonte temporal muy amplio. El caso inglés con el aprovechamiento de una excelente red de universidades por toda su geografía, puede ser ilustrativo. Dentro de la United Kingdom Science Association se dan cita experiencias tan diferentes como las del The Oxford Science Park, y la del Wolverhampton Science Park ajustadas a las características y posibilidades de cada centro y con objetivos y motivaciones diferentes. En todo caso algo parece estar asegurado: se camina en la dirección correcta, con dificultades, pero lo cierto es que hay la sensación de que se progresa.

La preocupación sobre el alcance y papel de la investigación universitaria española quizás no ha centrado suficientemente la atención de los responsables políticos y académicos preocupados ante la presencia de ese millón y medio de universitarios que llaman a la puerta pidiendo títulos. El problema, sin duda, será el inverso dentro de poco cuando el capital humano "con títulos" no

encuentre los puestos de trabajo cualificados que potencialmente aspira a ocupar. Pensar en este tema y tomar iniciativas es la clave para anticiparse a futuros y relevantes problemas, llamados a ser mayoritarios en muy pocos años.

La formación universitaria sí ha jugado un papel determinante en la sociedad española en los últimas décadas y, aun a falta de abundantes estudios en la materia, es posible defender su decisiva incidencia en el progreso de este país. Permítanme una concesión en el campo científico que mejor conozco, la economía, para abundar en algo ya suficientemente sabido. Sería difícil explicar la viabilidad de los grandes cambios en el modelo económico español, de su desarrollo -que partía de un ancestral sistema autárquico hacia la mitad del presente siglo- sin la influencia del pensamiento de jóvenes economistas formados en nuestras universidades- o la revolución y profesionalización en la gestión de nuestras empresas.

En esta vertiente el papel de la Universidad ha sido clave y va a seguir siéndolo durante muchos años. Aquellos que velan por la formación profesional no deberían ver en "los excesos" de la formación universitaria males irremediables. Sirve de poco un escalón inferior profesional sin la capacitación de un país en el que sus dirigentes, sus técnicos superiores, son poco proclives a los cambios, a la innovación, a su familiarización con el progreso tecnológico, a las sólidas bases de convivencia que deberían derivarse de una mayor formación humanista y social.

Quizás sea nuestro papel insistir durante los próximos años en que la universidad española debe recibir el respaldo de los poderes públicos para poder desempeñar su potencial papel en ayuda de la competitividad de la economía española. Un país con una tasa de desempleo permanentemente anclada en los dos dígitos, con muchas dificultades en el acceso de los jóvenes al mercado laboral, puede generar un panorama conflictivo y desolador en el nuevo contexto europeo en muy pocos años .

Con todo, aunque hemos impulsado muy modestamente este tipo de proyectos, -y partiendo de una lógica deformación profesional-, no estoy defendiendo un papel economicista de las universidades. En la universidad española no hay que esforzarse para dejar constancia de que una gran parte de nuestras iniciativas -con ello pongo de relieve mi complejo de tecnócrata- han ido dirigidas a una participación más activa de la formación humanista. Quizás esto último sea más difícil de vender en el contexto político actual, pero, sin duda, es clave en el desarrollo de las bases de convivencia y bienestar a los que debe aspirar la sociedad europea en el transcurso del próximo milenio.

Creo que para muchos de nosotros sigue vigente el pensamiento de Ortega cuando hace ya casi setenta años, en etapas de convulsión de la sociedad española afirmaba:

"La Universidad española consiste, primero y por lo pronto, en la enseñanza superior que debe recibir el hombre medio. Hay que hacer del hombre medio, ante todo, un hombre culto, situarlo a la altura de los tiempos"

Moltes Gràcies.